



Asamblea General

Distr. general
Español
Original: inglés

Comisión de Derecho Internacional

59º período de sesiones

Ginebra, 7 de mayo a 8 de junio

y 9 de julio a 10 de agosto de 2007

La obligación de extraditar o juzgar (*aut dedere aut judicare*)

Información y observaciones recibidas de los gobiernos

Adición

II. Información y observaciones recibidas de los gobiernos

A. Observaciones generales

Estados Unidos de América

1. Los Estados Unidos de América consideran que su práctica y la de otros países refuerza la idea de que no existe base suficiente en el derecho internacional consuetudinario o en la práctica de los Estados para elaborar un proyecto de artículos que amplíe la obligación de extraditar o juzgar más allá de lo previsto en los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes en los que se establece tal obligación.
2. En opinión de los Estados Unidos, el derecho internacional consuetudinario no contempla ninguna obligación general de extraditar o juzgar por delitos que no estén previstos en acuerdos internacionales que establezcan tal obligación. Los Estados Unidos consideran, por el contrario, que los Estados sólo asumen esas obligaciones al adherirse a instrumentos jurídicos internacionales vinculantes que contengan disposiciones en materia de extradición o enjuiciamiento y que tales obligaciones sólo se aplican respecto de los demás Estados que sean partes en dichos instrumentos. Varios intereses normativos importantes respaldan esta conclusión y esta práctica.
3. En primer lugar, no cabe duda de que, cuando un Estado sea parte en una convención en la que se tipifique un delito, el Estado en el que se detenga a un delincuente habrá tipificado el delito en cuestión y establecido su jurisdicción al respecto. Pero no sería siempre así si existiera una obligación de extraditar o juzgar independiente. Un Estado podría solicitar la extradición de una persona a otro



Estado en que el comportamiento en cuestión no constituyera delito (y, por lo tanto, respecto del cual normalmente no cabría conceder la extradición, que generalmente requiere la doble incriminación) y el Estado que no hubiera tipificado ese comportamiento como delito se vería no obstante obligado a juzgar a la persona en cuestión. Esto colocaría al Estado requerido en una situación insostenible, ya que su derecho interno impediría tanto el enjuiciamiento como la extradición.

4. Asimismo, y en segundo lugar, podría entenderse que una obligación de extraditar o juzgar independiente conllevaría la obligación de extraditar aunque no existieran los tratados u otras disposiciones jurídicas que fueran necesarias en virtud del derecho interno de un Estado para llevar a cabo tal acción. En los Estados Unidos, por ejemplo, es preciso (con muy pocas excepciones) que exista un tratado para poder extraditar a un delincuente a un Estado requirente. Así pues, si un Estado carece de jurisdicción para juzgar un delito cometido por un delincuente cuya extradición ha sido solicitada por un Estado con el que no ha celebrado un tratado, un artículo de la Comisión de Derecho Internacional que estableciera la obligación de extraditar o juzgar podría exigir que el Estado extraditara al delincuente aun cuando careciese de competencia para ello con arreglo a su derecho interno.

5. En tercer lugar, si la práctica de aplicar una obligación de extraditar o juzgar estuviera extendida entre los Estados, cabría esperar que la mayoría de ellos hubiera promulgado leyes que, de manera general, atribuyeran competencia extraterritorial respecto de la mayoría de los delitos por el mero hecho de que el delincuente se encontrara en su territorio. No ocurre así en los Estados Unidos y, según la experiencia de este país, tampoco en muchos otros Estados. Al contrario: ese tipo de competencia es muy limitada y se basa principalmente en obligaciones previstas en tratados específicos. Por tanto, la adopción de una obligación de extraditar o juzgar haría preciso que muchos Estados ampliaran drásticamente su competencia extraterritorial a los delitos cometidos en cualquier parte del mundo.

6. En cuarto lugar, los Estados de todo el mundo formulan y aceptan miles de solicitudes de extradición cada año. Es indudable que en muchos de esos casos el Estado requirente no desearía que el Estado requerido juzgara a la persona si no fuera posible su extradición. La extradición permite reparar los derechos e intereses de la víctima y del Estado en que se cometió el delito de una manera que no siempre se puede lograr mediante el enjuiciamiento en un Estado extranjero. Además, puede haber casos en que al país requerido le resulte imposible juzgar a la persona en cuestión por no haberse desarrollado la correspondiente investigación conforme a los procedimientos previstos en sus leyes.

7. Por último, la decisión de un Estado de aceptar una relación de extradición con otro Estado entraña importantes consideraciones respecto de la observancia por ese otro país del estado de derecho, las debidas garantías procesales, los derechos humanos y otras normas. Una obligación general de extraditar o juzgar constituiría una intromisión en la soberanía de los Estados, pues se intentaría imponer esa relación aunque el Estado no lo deseara o se exigiría que el Estado llevara a cabo un acto soberano —el enjuiciamiento— que no deseara realizar por motivos jurídicos, políticos o de otra índole.

8. En consecuencia, los Estados Unidos consideran que la Comisión de Derecho Internacional no debería elaborar un proyecto de artículos sobre esta cuestión sino que, por el contrario, debería concluir que no existe tal obligación al margen de los tratados internacionales.

B. Tratados internacionales por los que un Estado está obligado que enuncien la obligación de extraditar o juzgar (*aut dedere aut judicare*) y reservas hechas por ese Estado para limitar la aplicación de esta obligación

Letonia

9. Letonia es parte en varios tratados internacionales en los que figura la obligación de extraditar o juzgar¹, como el Convenio Europeo sobre Extradición, 1957; el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 1970; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1971; el Protocolo Adicional del Convenio Europeo sobre Extradición, 1975; el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, 1977; el Segundo Protocolo Adicional del Convenio Europeo sobre Extradición, 1978; la Convención Internacional contra la toma de rehenes, 1979; la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, 1979; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 1988, y su Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, 1988; el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1988; el Convenio Penal sobre la Corrupción, 1999; el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000; el Protocolo por el que se modifica el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, 2003; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003.

10. Letonia también es parte en varios tratados bilaterales que prevén esa obligación: el Acuerdo con la República de Estonia y la República de Lituania sobre asistencia judicial, 11 de noviembre de 1992; el Acuerdo con la Federación de Rusia sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, 3 de febrero de 1993; el Acuerdo con la Federación de Rusia relativo a la entrega de personas condenadas, 4 de marzo de 1993; el Acuerdo con la República de Moldova sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, 14 de abril de 1993; el Acuerdo con la República de Belarús sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, 21 de febrero de 1994; el Acuerdo con la República de Polonia sobre asistencia judicial en materia civil, familiar, laboral y penal, 23 de febrero de 1994; el Acuerdo con Ucrania sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, 23 de mayo de 1995; el Acuerdo con la República Kirguisa sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, 10 de abril de 1997; el Acuerdo con el Gobierno de la República de Uzbekistán sobre asistencia judicial en materia civil, familiar, laboral y penal, 23 de mayo de 1997; y el Tratado de Extradición con Australia, 14 de julio de 2000.

Serbia

11. La obligación de extraditar o juzgar a un presunto delincuente está contemplada en varias convenciones internacionales en vigor entre Serbia y otros países. En algunas de esas convenciones se establece la aplicación del derecho

¹ En la presente adición no se reproducen los detalles de los tratados multilaterales que se han citado con anterioridad, que pueden encontrarse en el informe original (A/CN.4/579) y en su primera adición (A/CN.4/579/Add.1).

interno (el enjuiciamiento en el país que ha denegado la solicitud de extradición) mientras que en otras se prevé la posibilidad de adoptar ese tipo de medidas.

12. Serbia ha firmado o se ha adherido a varios instrumentos internacionales, en particular el Convenio Europeo sobre Extradición, 1957; el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 1970; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1971; la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 1973; el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, 1977; la Convención Internacional contra la toma de rehenes, 1979; la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, 1979; el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 1988; el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 1997; el Convenio Penal del Consejo de Europa sobre la Corrupción, 1999; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000.

13. Serbia también ha celebrado tratados bilaterales de extradición con Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, España, los Estados Unidos, la ex República Yugoslava de Macedonia, la Federación de Rusia, Francia, Grecia, Hungría, el Iraq, Italia, Mongolia, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, Rumania, Suiza y Turquía.

14. Los tratados bilaterales mencionados no regulan específicamente cuestiones relacionadas con la extradición o el enjuiciamiento. Sin embargo, en varios de ellos figura como motivo para denegar la extradición la competencia judicial del Estado requerido para juzgar a la persona de que se trate, es decir, que en caso de que se deniegue la extradición se pueden incoar actuaciones penales en el Estado requerido contra la persona cuya extradición se haya denegado. Por otro lado, varios de esos tratados prevén que la solicitud de extradición habrá de denegarse cuando ya se hayan incoado actuaciones penales por el mismo delito.

15. Habida cuenta de lo anterior, cuando un extranjero cometa un delito fuera del territorio serbio, existe la posibilidad de que Serbia lo extradite al Estado requirente (que es lo que normalmente ocurre). Sin embargo, si se deniega la solicitud de extradición, existe la obligación de enjuiciar al presunto delincuente en Serbia por ese mismo delito con arreglo a la legislación nacional o a un tratado internacional, que tiene primacía sobre el derecho nacional.

16. Asimismo, los nacionales de Serbia, que no pueden ser extraditados a otro país, pueden ser enjuiciados en Serbia con arreglo a la legislación nacional o a los tratados internacionales pertinentes por los delitos cometidos en el extranjero.

Sri Lanka

17. Sri Lanka es parte en los siguientes tratados en los que figura la obligación de extraditar o juzgar y, al firmar dichos tratados, no formuló reserva alguna para limitar la aplicación de dicha obligación: el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en

campana, 1949; el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, 1949; el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949; el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949; el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, 1950; el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 1970; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1971; la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 1973; la Convención Internacional contra la toma de rehenes, 1979; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988; el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio de Montreal, 1988 (Protocolo de Montreal); el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 1988; el Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, 1991; el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 1997; el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000. Además, Sri Lanka ha firmado el Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, 2005, que será ratificado en breve, una vez adoptada la legislación necesaria.

18. A escala regional, Sri Lanka ha firmado convenciones regionales que prevén la obligación de extraditar o juzgar. Así, Sri Lanka ha suscrito, en el marco de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional, la Convención regional sobre la eliminación del terrorismo, 1987, y su Protocolo Adicional, 2004, así como la Convención sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 1990.

19. Por último, Sri Lanka ha firmado tratados bilaterales de extradición con la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), Maldivas y los Estados Unidos. También hay varios tratados de extradición anteriores a la independencia que, en función de cada caso, podrían aplicarse con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Extradición No. 8 de 1977.

Estados Unidos de América

20. Los Estados Unidos son parte en varios convenios y convenciones internacionales en los que figura la obligación de extraditar o juzgar, entre ellos el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 1970; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1971; la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 1973; la Convención Internacional contra la toma de rehenes, 1979; la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, 1979; el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio de Montreal, 1988 (Protocolo de Montreal); el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 1988; el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, 1988; el

Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 1997; y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999.

21. Los Estados Unidos consideran que los compromisos de extraditar o juzgar asumidos en virtud de dichos convenios y convenciones son un aspecto importante de los esfuerzos colectivos para negar cobijo a terroristas y otros delincuentes. Los Estados Unidos son firmes defensores de que se incluya este tipo de disposiciones en instrumentos internacionales.

22. Los Estados Unidos observan, sin embargo, que los convenios y convenciones multilaterales en materia penal adoptados recientemente no imponen de manera uniforme obligaciones de extraditar o juzgar. Por el contrario, con arreglo a recientes instrumentos de aplicación a gran escala y tan importantes como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000, el Convenio del Consejo de Europa sobre el Delito Cibernético, 2001, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003, el Estado en que se detenga a un delincuente únicamente tendrá la obligación de enjuiciarlo cuando a) se deniegue la extradición en razón de la nacionalidad del delincuente; y b) el Estado requirente pida que se lleve a cabo tal enjuiciamiento. Así pues, el consenso que existe en la comunidad internacional sugiere que la obligación estricta de extraditar o juzgar debería aplicarse únicamente a ciertas categorías de los delitos más graves y recaer únicamente en aquellos Estados que hayan asumido tal obligación (y realizado las modificaciones necesarias en su legislación penal y procesal) mediante la adhesión a un instrumento internacional jurídicamente vinculante que contemple dichos delitos.

23. Los Estados Unidos no han formulado reservas a fin de limitar la aplicación de la obligación de extraditar o juzgar *per se*. Sin embargo, al adherirse a los convenios y convenciones antes mencionados, la posición de los Estados Unidos ha sido siempre la de considerar que las obligaciones de extradición en el marco de esos instrumentos sólo se aplican a fin de ampliar las posibilidades de extradición con países con los que los Estados Unidos ha celebrado tratados bilaterales de extradición. Los Estados Unidos no utilizan los convenios y convenciones multilaterales como base para la extradición si no existe un tratado bilateral, porque consideran que la extradición es una cuestión que ha de abordarse en el marco de los tratados y que no hay obligación de extraditar cuando no existe un tratado bilateral. Las mismas limitaciones se aplican a la obligación de extraditar o juzgar.

C. Normativa legal interna adoptada y aplicada por un Estado, en particular las disposiciones constitucionales y los códigos penales o códigos de procedimiento penal, concernientes a la obligación de extraditar o juzgar

Letonia

24. En Letonia la obligación de extraditar o juzgar (*aut dedere aut judicare*) está regulada en la Constitución de la República de Letonia, la Ley de Ciudadanía y la Ley de Procedimiento Penal². De conformidad con el artículo 98 de la Constitución, toda persona tiene derecho a abandonar libremente el territorio de Letonia. Las

² En la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría pueden consultarse extractos del derecho nacional facilitados por el Gobierno de Letonia.

personas con pasaporte letón gozan de la protección del Estado cuando se encuentran en el extranjero y tienen derecho a regresar libremente a Letonia. No puede extraditarse a un ciudadano de Letonia a un país extranjero, salvo en los casos previstos en los acuerdos internacionales ratificados por el Parlamento y siempre que la extradición no vulnere los derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución.

25. Esta cuestión está regulada en la parte C de la Ley de Procedimiento Penal, que lleva por título “Cooperación internacional en materia penal”. El capítulo 64 de la parte C, titulado “Disposiciones generales en materia de cooperación”, prevé distintos tipos de cooperación internacional. El capítulo 65 (“Extradición de una persona a Letonia”) contiene artículos relativos a los requisitos y procedimientos para presentar una solicitud de extradición; los motivos y procedimientos para emitir una orden de búsqueda internacional; la solicitud de detención provisional; la recepción de una persona extraditada por un Estado extranjero; la extradición de una persona por un Estado extranjero por un período determinado; los requisitos en materia de responsabilidad penal y cumplimiento de penas de una persona extraditada por un Estado extranjero; el cómputo del período de detención en un Estado extranjero; la extradición de una persona a Letonia por un Estado miembro de la Unión Europea; los procedimientos para adoptar una orden de detención europea; el cumplimiento de una orden de detención europea; y las condiciones para la recepción de una persona extraditada por un Estado miembro de la Unión Europea.

26. El capítulo 66 (“Extradición de una persona a un Estado extranjero”) establece los principios para la extradición de una persona. En primer lugar, se puede extraditar a una persona que se encuentre en el territorio de Letonia para su enjuiciamiento penal, su comparecencia en juicio o la ejecución de una sentencia si se ha recibido una solicitud de un Estado extranjero para extraditar a esa persona en relación con una infracción que, de conformidad con el derecho de Letonia y del Estado extranjero, tenga carácter penal. En segundo lugar, se puede extraditar a una persona para su enjuiciamiento penal o su comparecencia en juicio en relación con una infracción que lleve aparejada una pena privativa de libertad de una duración máxima no inferior a un año, o una pena más grave. En tercer lugar, se puede extraditar a una persona para la ejecución de una sentencia en el Estado que haya dictado esa sentencia y condenado a la persona a una pena privativa de libertad por un período no inferior a cuatro meses. En cuarto lugar, si se ha solicitado la extradición en relación con varias infracciones penales, pero no puede aplicarse la extradición a una de ellas por no cumplir los requisitos relativos a la pena que se haya impuesto o pueda imponerse, también se podrá extraditar a la persona en relación con esa infracción penal.

27. Si por algún motivo Letonia no puede extraditar a una persona, existe la posibilidad de continuar el procedimiento penal en ese país o reconocer y ejecutar en él una sentencia ya dictada. De conformidad con el capítulo 67 (“Continuación en Letonia del procedimiento penal incoado en un Estado extranjero”) y el capítulo 68 (“Remisión de las actuaciones penales incoadas en Letonia”) de la Ley de Procedimiento Penal, es posible, a raíz de la solicitud de un Estado extranjero o con su consentimiento, continuar en Letonia el procedimiento penal incoado en ese Estado extranjero si tal continuación viene exigida por intereses procesales y la infracción es punible con arreglo al Código Penal de Letonia. La remisión de actuaciones penales consiste en la suspensión del procedimiento penal en Letonia y su continuación en un Estado extranjero cuando existan motivos para considerar a

una persona sospechosa o para enjuiciarla por la comisión de una infracción pero el desarrollo con éxito y sin demora del procedimiento penal en Letonia no sea posible o se vea obstaculizado y, además, la remisión al Estado extranjero permita superar esa imposibilidad u obstáculo. Sólo se podrá remitir una causa penal en la que haya empezado a surtir efecto una sentencia condenatoria cuando ésta no pueda ejecutarse en Letonia y el Estado extranjero en que reside la persona condenada no acepte la ejecución en él de una sentencia de otro Estado.

28. El capítulo 71 (“Ejecución en Letonia de una pena impuesta en un Estado extranjero”) de la Ley de Procedimiento Penal regula el contenido y los requisitos para la ejecución de una pena impuesta en un Estado extranjero. Según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Penal, la ejecución en Letonia de una pena impuesta en un Estado extranjero equivale al reconocimiento manifiesto de la justificación y licitud de dicha pena y ha de llevarse a cabo con arreglo al procedimiento que se aplicaría si la pena se hubiera impuesto en el marco de un procedimiento penal desarrollado en Letonia. Por otra parte, el reconocimiento de la justificación y licitud de una pena impuesta en un Estado extranjero no impedirá que ésta se armonice con la pena prevista en el Código Penal de Letonia para esa misma infracción. Según el artículo 777 de la Ley de Procedimiento Penal, cabrá ejecutar una pena impuesta en un Estado extranjero si a) Letonia ha celebrado un tratado con el Estado extranjero relativo a la ejecución de penas impuestas por dicho Estado; b) el Estado extranjero ha formulado una solicitud para que se ejecute la pena impuesta en dicho Estado; c) la pena se ha impuesto en el Estado extranjero mediante resolución válida dictada al término de un procedimiento penal; d) la persona condenada podría ser sancionada por la misma infracción con arreglo al Código Penal de Letonia; e) la pena no ha prescrito en el Estado extranjero ni en Letonia; f) en el momento en que se dictó la sentencia la responsabilidad penal no había prescrito de conformidad con el Código Penal de Letonia; y g) en el Estado extranjero existe al menos uno de los motivos para solicitar la ejecución de una pena que se mencionan en el artículo 804 de la Ley de Procedimiento Penal de Letonia.

29. Con arreglo al capítulo 72 (“Ejecución en un Estado extranjero de una pena impuesta en Letonia”) de la Ley de Procedimiento Penal, la ejecución en un Estado extranjero de una pena impuesta en Letonia equivale al reconocimiento de la justificación y licitud de esa pena y ha de llevarse a cabo con arreglo al procedimiento que se aplicaría si la pena se hubiera impuesto en el marco de un procedimiento penal desarrollado en el Estado extranjero.

Serbia

30. El derecho interno de Serbia también regula la cuestión de la extradición o el enjuiciamiento.

31. Cabe destacar, en particular, que el Código de Procedimiento Penal regula en artículos concretos, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con la extradición de las personas acusadas o condenadas y otras formas de asistencia judicial internacional (forma general de esa asistencia, remisión y continuación de actuaciones penales, ejecución de resoluciones judiciales extranjeras).

32. Por lo que respecta a la extradición y a otras formas de asistencia judicial internacional en materia penal, el Código de Procedimiento Penal prevé la primacía de los tratados internacionales. En realidad, sus disposiciones sólo son aplicables si

no existe un tratado internacional, pero en los casos en que se aplica, dicho Código no regula determinadas cuestiones.

33. Esta disposición se ajusta a la Constitución de Serbia, según la cual las normas de derecho internacional generalmente aceptadas y los tratados internacionales ratificados forman parte integrante del ordenamiento jurídico de Serbia y son directamente aplicables. Además, los tratados internacionales no pueden ser contrarios a la Constitución, mientras que las leyes y demás actos jurídicos generales aprobados por Serbia no pueden contradecir lo dispuesto en los instrumentos internacionales ratificados y en las normas de derecho internacional generalmente aceptadas.

34. La Constitución de Serbia no contiene ninguna disposición relativa a la extradición de personas acusadas o condenadas.

35. La extradición de personas acusadas o condenadas y la posibilidad de que sean enjuiciadas en Serbia son cuestiones que no se supeditan a la existencia de un tratado internacional. En consecuencia, si no hay un tratado internacional se aplicarán las disposiciones del derecho interno en lo que respecta a la extradición o el enjuiciamiento en el marco de las relaciones judiciales internacionales.

36. El Código de Procedimiento Penal, que establece los requisitos para la extradición de las personas acusadas o condenadas y las circunstancias que han de tomarse en consideración a efectos de denegar la extradición de esas personas, así como el procedimiento para determinar dichas circunstancias, no contempla específicamente la obligación o el deber de extraditar o juzgar (*aut dedere aut judicare*).

37. Sin embargo, por lo que respecta a la extradición o el enjuiciamiento, el Código de Procedimiento Penal no permite la extradición de un nacional de Serbia a otro país. Tampoco contempla la extradición de un extranjero por un delito cometido contra Serbia o sus nacionales, con independencia de que tal delito se haya cometido en el territorio de Serbia o fuera de él. En consecuencia, el Código de Procedimiento Penal establece la competencia judicial de Serbia en relación con el enjuiciamiento, de modo que éste se llevará a cabo en Serbia.

38. Con arreglo al Código de Procedimiento Penal, se puede extraditar a un extranjero si no se ha incoado un procedimiento penal contra él en Serbia por un delito contra este país o uno de sus nacionales o, en caso de que sí se haya incoado tal procedimiento, si se ha constituido una fianza a fin de garantizar las pretensiones de la parte lesionada.

39. Las soluciones que figuran en las disposiciones del Código Penal de Serbia en cuanto al ámbito de aplicación geográfico de la legislación penal en Serbia (aplicabilidad de la legislación penal en función del lugar en que se ha cometido el delito) revisten especial importancia en relación con la obligación de extraditar o juzgar en el derecho nacional. Esas disposiciones prevén la aplicación de la legislación penal de Serbia cuando se ha cometido un delito en su territorio, pero también pueden aplicarse si el delito se ha cometido fuera del territorio de Serbia. Así ocurre, en particular, en los casos en que el país extranjero en que se ha cometido el delito no solicita la extradición de un presunto delincuente, o bien la solicita pero, por algún motivo, se le deniega.

40. Según el Código Penal, cuando se comete un delito en el territorio de Serbia el principio fundamental que ha de aplicarse es el de territorialidad: la legislación

penal de Serbia se aplicará a todos los delitos cometidos en su territorio, con independencia de la nacionalidad del presunto delincuente. Este principio se ha ampliado hasta englobar la nacionalidad de los buques o aeronaves. El Código Penal prevé la posibilidad de remitir las actuaciones penales a otro país, en particular si el delito lleva aparejada una pena de hasta 10 años de prisión o si se trata de un delito contra la seguridad del transporte público, con independencia de la pena que lleve aparejada. Si un país extranjero ha incoado o completado un procedimiento relativo a un delito cometido en el territorio de Serbia, sólo podrá enjuiciarse ese mismo delito en Serbia previa autorización del Fiscal General de la República. Se reconocen las excepciones al principio de territorialidad previstas en el derecho internacional público (por ejemplo, las personas que gozan de inmunidad diplomática plena), y en esos casos se aplicará la legislación nacional.

41. La legislación penal de Serbia también se aplica a toda persona (nacional o extranjero) que cometa en el extranjero un delito contra Serbia, es decir, un delito contra el orden constitucional y la seguridad de Serbia —salvo la instigación al odio, la división o la intolerancia nacional, racial o religiosa— o un delito de falsificación de moneda, si se trata de moneda nacional. En todos los casos mencionados, se aplicará sin excepciones la legislación de Serbia.

42. La legislación penal de Serbia también se aplica a sus nacionales cuando estos hayan cometido cualquier otro delito en el extranjero y sean detenidos en el territorio de Serbia o hayan sido extraditados a este país. La razón para aplicar este principio de personalidad activa reside en que el nacional de Serbia que regresa a su país no debe eludir su responsabilidad penal por los delitos que ha cometido en el extranjero, habida cuenta de que no puede ser entregado a otro país. Según este principio, la legislación penal de Serbia se aplica incluso al delincuente que adquiriera la nacionalidad serbia después de haber cometido el delito en cuestión. Esta disposición es necesaria para asegurar el enjuiciamiento de los delincuentes que no pueden ser extraditados a otro país por haber sido extranjeros en el momento en que cometieron el delito. Estos casos únicamente pueden enjuiciarse en Serbia si no se ha aplicado la legislación penal extranjera o si se trata de un delito que también es punible con arreglo a la legislación del país en que se cometió. En caso contrario, será necesario obtener la autorización del Fiscal General de la República para poder enjuiciar esos casos en Serbia.

43. La legislación penal de Serbia también se aplicará a los extranjeros que hayan cometido un delito contra Serbia o sus nacionales fuera del territorio serbio, si son detenidos en el territorio de Serbia o han sido entregados a este país. Estas personas sólo pueden ser enjuiciadas si el delito cometido también es punible con arreglo a la legislación del país en que se cometió. En caso contrario, el Fiscal General de la República deberá autorizar dicho enjuiciamiento.

44. Por otro lado, la legislación penal de Serbia también es aplicable al extranjero que cometa, fuera del territorio serbio, un delito contra un país extranjero o contra otro extranjero que esté castigado por la legislación penal del país en que se cometió con una pena de al menos cinco años de prisión o con una pena más grave (principio universal). A fin de aplicar este principio se requiere, además, que el extranjero se encuentre en el territorio de Serbia, pero no sea extraditado, y que el delito también sea punible con arreglo a las leyes del país en que se cometió. Hay una excepción al requisito de que el delito también esté tipificado como tal en el derecho extranjero: que se trate de una acción que se considere delito con arreglo a los principios de

derecho reconocidos por la comunidad internacional. En ese caso, es posible, con arreglo al Código Penal de Serbia, enjuiciar a la persona en cuestión previa autorización del Fiscal General de la República. En caso de que se aplique la legislación nacional, la persona acusada no puede ser condenada a una pena más severa que la prevista en la legislación penal del país en que se cometió el delito.

45. Habida cuenta de lo anterior, la legislación penal de Serbia y el principio universal sólo se aplicarán si ningún país extranjero ha solicitado la extradición de un extranjero o si se ha denegado la extradición solicitada.

46. En caso de que se deniegue la solicitud de extradición, será necesario y estará justificado que se aplique la legislación penal de Serbia, es decir, que se enjuicie al extranjero en cuestión en Serbia a fin de hacer efectiva su responsabilidad penal o imponerle su castigo. En este contexto, también puede considerarse que la aplicación del derecho interno (a saber, el enjuiciamiento) es obligación del país que deniega la extradición. En estos casos se refleja por tanto plenamente la aplicación del principio *aut dedere aut judicare*.

47. Por regla general, la práctica judicial en Serbia permite la extradición de extranjeros siempre que se cumplan todos los requisitos para ello. Por esta razón, rara vez se aplica el principio universal. Sin embargo, esto no resta importancia al principio según el cual un presunto delincuente puede ser enjuiciado en cualquier momento a fin de evitar que eluda su responsabilidad penal.

48. Además, y en relación con los principios de personalidad activa y universalidad, no se llevará a cabo el enjuiciamiento en Serbia: a) si el delincuente ha cumplido en su totalidad la pena que se le impuso en un país extranjero; b) si el delincuente ha sido absuelto mediante resolución judicial jurídicamente válida, si la pena ha prescrito o si ha sido indultado; c) si en un país extranjero se ha impuesto una medida de seguridad adecuada al delincuente que sufra de enfermedad mental; o d) si, con arreglo a la legislación extranjera, el delito es perseguible a instancia de la víctima y ésta no ha interpuesto la correspondiente querrela.

Sri Lanka

49. La Ley de Extradición No. 8 de 1977 establece el régimen jurídico básico relativo a la extradición de delincuentes prófugos solicitada por determinados países del Commonwealth o Estados partes en tratados.

50. Además, las leyes aprobadas para hacer efectivos los tratados internacionales en materia de represión de delitos internacionales graves en los que figura la obligación de extraditar o juzgar contienen las disposiciones necesarias para modificar la Ley de Extradición No. 8 de 1977; en particular, califican los delitos contemplados en dichos convenios y convenciones de delitos que pueden dar lugar a extradición y prevén la posibilidad de llevar a cabo la extradición sobre la base de esos convenios y convenciones cuando no exista un tratado de extradición con un Estado extranjero. Estas leyes de aplicación son las siguientes: Ley No. 24 de 1982 relativa a los delitos cometidos contra las aeronaves; Ley No. 70 de 1988 relativa a la Convención regional sobre la eliminación del terrorismo de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional; Ley No. 31 de 1996 relativa a la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional; Ley No. 11 de 1999 relativa a la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas; Ley No. 41 de 2000 para la prevención

de la toma de rehenes; Ley No. 42 de 2000 relativa a la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima; y Ley No. 25 de 2005 relativa al Convenio para la represión de la financiación del terrorismo.

Estados Unidos de América

51. Los Estados Unidos carecen de disposiciones jurídicas internas relativas a la obligación de extraditar o juzgar. En efecto, como ya se indicó, la legislación de los Estados Unidos en materia de extradición establece claramente que sólo se aplicará mientras exista un tratado de extradición con un Gobierno extranjero (18 U.S.C. §3181 a)).

D. Práctica judicial de un Estado que refleje la aplicación de la obligación *aut dedere aut judicare*

Letonia

52. La práctica judicial en Letonia sobre la aplicación de la obligación *aut dedere aut judicare* es escasa. En 2006 Letonia recibió tres solicitudes de asistencia judicial relativas a la extradición de personas para su enjuiciamiento en vía penal. Dos de estas solicitudes todavía se están tramitando; la tercera ya ha sido atendida.

Serbia

53. En la práctica, Serbia permite, por regla general, la extradición de un extranjero a otro país por los delitos cometidos en ese país. Así, por ejemplo, en los últimos 10 años sólo se han denegado solicitudes de extradición en contadas ocasiones, fundamentalmente porque se trataba de nacionales de Serbia. No se ha actuado contra esas personas en Serbia porque las infracciones cometidas no cumplían los requisitos para ser consideradas delitos con arreglo a los instrumentos internacionales que establecen la obligación de extraditar o juzgar. En tales casos ningún país ha solicitado que Serbia juzgue a esas personas ni se ha facilitado material probatorio que permita incoar actuaciones penales contra ellas.

54. En la práctica hay muchos más casos de países extranjeros que han denegado las solicitudes de extradición formuladas por Serbia. De hecho, las personas en cuestión no son enjuiciadas ni comparecen ante los tribunales en los países que se niegan a extraditarlas. Por el contrario, son liberadas y, a veces, extraditadas posteriormente por otros países en los que son detenidas sobre la base de una orden de búsqueda internacional.

Sri Lanka

55. En la sentencia del Tribunal Supremo en la causa *Ekanayake v. Attorney General* (SLR 1988 (1) pág. 46) se tomaron en consideración los siguientes convenios internacionales en los que figura la obligación de extraditar o juzgar: a) el Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, 1963; b) el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 1970; y c) el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1971. La causa versaba sobre el secuestro por un nacional de Sri Lanka de un avión de Alitalia con destino a Bangkok. El delincuente había sido juzgado y condenado por el Tribunal Superior de Colombo con arreglo a la Ley No. 24 de 1982 relativa a los delitos cometidos contra las aeronaves.

Estados Unidos de América

56. La práctica judicial en los Estados Unidos interpreta de manera reiterada que la obligación de extraditar o juzgar está íntimamente ligada a los convenios y convenciones internacionales. Así, por ejemplo, en la causa *U.S. v. Yousef*, 327 F.3d 56 (2d Cir. 2003), un Tribunal de Apelación de los Estados Unidos sostuvo que el Convenio de Montreal creaba “un acuerdo judicial entre los Estados contratantes para extraditar o juzgar a los delincuentes que cometen los actos prohibidos por el tratado” (ibíd., pág. 96). El Gobierno de los Estados Unidos no tiene conocimiento de ninguna resolución judicial dictada en ese país que aplique dicha obligación al margen de lo previsto en los convenios y convenciones en que los Estados Unidos son parte.
